

DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA
POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
Sistema de Alertas Tempranas – SAT

NOTA DE SEGUIMIENTO N° 037-07
Segunda Nota al Informe de Riesgo N° 016-06A.I.
del 27 de abril de 2006

Fecha: 10 de Agosto de 2007

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana			Zona Rural		Territorio Étnico	
		Cabecera, Localidad o Zona	Comuna	Barrio	Corregimiento	Vereda	Resguardo	Territorios Colectivos.
CHOCÓ	Bojayá				.		Nuevo Olivo Unión Cuita Punto Alegre Hojas Blancas Lana Salinas, Túgena	
ANTIOQUIA	Vigía del Fuerte				San José de Padua Veracruz San Miguel			San José de Padua Veracruz San Miguel

VALORACION DEL CIAT

FECHA DE REUNIÓN DEL CIAT	VALORACIÓN DEL INFORME DE RIESGO
5 de febrero de 2007	Mantener vigente la Alerta Temprana

RECOMENDACIONES DEL CIAT

Una vez valorada y evaluada la información de los reportes entregados por cada uno de los delegados que tienen participación en el comité, se decidió conjuntamente mantener la consideración de Alerta Temprana, emitida inicialmente para el Informe de Riesgo el 23 de Mayo de 2006. Por lo anterior, con el propósito de orientar a las autoridades hacia la mitigación,

disuasión y control de la situación de riesgo –con el fin de proteger y atender a la población civil-, se consideró necesario la emisión y remisión de las siguientes recomendaciones:

- Al Gobernador del Chocó y al Gobernador de Antioquia, de forma independiente, que se coordine con las demás autoridades civiles y de Fuerza Pública correspondientes la adopción de las medidas necesarias para reforzar los dispositivos de seguridad y de protección de la población Afrocolombiana e indígena de las zonas rurales descritas como foco del riesgo. De igual manera, se recomendó la adopción de medidas que garanticen la libre movilización de la población civil, de sus alimentos y demás bienes indispensables para la supervivencia.

Por otra parte, de manera especial se recomendó que se adelanten las gestiones necesarias ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, para que se realice el respectivo diagnóstico sobre el estado actual de las tierras en lo que tiene que ver con la titulación colectiva. Igualmente, se recomendó la promoción ante las instancias competentes del nivel nacional, de temas como la promoción del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, la implementación de programas viables para la sustitución de cultivos, la comercialización de la producción agrícola y la garantía de la seguridad alimentaria de la población afrodescendiente e indígena. Por último, se incitó para que en el marco del Decreto 250 de 2005, se adelanten acciones en cuanto a la operación de los mecanismos comunitarios, jurídicos e institucionales para la protección de los territorios étnicos.

- Al Alcalde Municipal de Bojayá y al Alcalde Municipal de Vigía del Fuerte, de forma independiente, que se coordine con las demás autoridades civiles y de Fuerza Pública correspondientes la adopción de las medidas necesarias para reforzar los dispositivos de seguridad y de protección de la población Afrocolombiana e indígena de las zonas rurales descritas como foco del riesgo. De igual manera, se recomendó la adopción de medidas que garanticen la libre movilización de la población civil, de sus alimentos y demás bienes indispensables para la supervivencia; así como, la activación permanente del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada -CMAIPD y la actualización del Plan de Atención para los desplazamientos masivos.

De manera especial se recomendó que se adelanten las gestiones necesarias ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, para que se realice el respectivo diagnóstico sobre el estado actual de las tierras en lo que tiene que ver con la titulación colectiva. Por último, se recomendó la promoción ante las instancias competentes del nivel nacional, de temas como la promoción del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, la implementación de programas viables para la sustitución de cultivos, la comercialización de la producción agrícola y la garantía de la seguridad alimentaria de la población afrodescendiente e indígena.

- Al Comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército, al Comandante del Comando Conjunto N° 1 "Caribe", al Comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N° 20, al Comandante del Departamento de Policía Chocó y al Comandante del Departamento de Policía Antioquia, de forma independiente, que se coordine con las demás autoridades civiles y de Fuerza Pública correspondientes la adopción de las medidas necesarias para reforzar los dispositivos de seguridad y de protección de la población Afrocolombiana e indígena de las zonas rurales descritas como foco del riesgo. De igual manera, se

recomendó la adopción de medidas que garanticen la libre movilización de la población civil, de sus alimentos y demás bienes indispensables para la supervivencia, y den garantías a la permanencia y libre desarrollo de sus actividades cotidianas al interior de sus territorios.

- Al Director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, para que en el marco del Decreto 250 de 2005, se adelanten las acciones tendientes a cumplir con lo ordenado en cuanto a la operación de los mecanismos comunitarios, jurídicos e institucionales para la protección de los territorios étnicos, verificando y apoyando la situación legal, de seguridad jurídica, de ordenamiento y manejo del territorio colectivo, así como de los resguardos mencionados en el documento.
- Al Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que se coordinen las acciones pertinentes para prevenir futuros desplazamientos a través de la ejecución de los programas que se desarrollan desde esa entidad, tales como la Red de Seguridad Alimentaria –RESA, y Cadenas Productivas y Sociales. De igual manera, se recomendó el refuerzo de las medidas que faciliten el registro de las personas y comunidades étnicas afectadas.

Por otra parte, de manera especial se recomendó que, en el marco del Decreto 250 de 2005, se adelanten las acciones tendientes a cumplir con lo ordenado en cuanto a la operación de los mecanismos comunitarios, jurídicos e institucionales para la protección de los territorios étnicos, verificando y apoyando la situación legal, de seguridad jurídica, de ordenamiento y manejo del territorio colectivo, así como de los resguardos mencionados en el documento. Por último, se recomendó garantizar la activación permanente de los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada -CMAIPD y la actualización del Plan de Atención para los desplazamientos masivos.

- A la Directora de Étnias (e) de este Ministerio, para que en el marco del Decreto 250 de 2005, se adelanten las acciones tendientes a cumplir con lo ordenado en cuanto a la operación de los mecanismos comunitarios, jurídicos e institucionales para la protección de los territorios étnicos, verificando y apoyando la situación legal, de seguridad jurídica, de ordenamiento y manejo del territorio colectivo, así como de los resguardos mencionados en el documento.

NUEVA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Luego de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba –BEC– ACCU (el 15 de agosto de 2006, Freddy Rendón Herrera alias Luis Alfredo Berrío o El Alemán, se desmovilizó junto a 600 de sus hombres, en el municipio Unguía, Chocó), la guerrilla de las FARC está asumiendo el control de los territorios desalojados por los paramilitares, penetrando principalmente a las partes altas de las cuencas de los ríos Napipí, Opogadó y Bojayá en el municipio Bojayá; y los ríos Arquía y Murri, municipio Vigía del Fuerte.

Posterior a la emisión del Informe de Riesgo, en abril de 2006 y pese a las acciones contrainsurgentes del Ejército Nacional, las FARC en su pretensión de controlar las cabeceras de los ríos mencionados, han intensificado la presión sobre los Pueblos Indígenas de Unión Baquiza, Egoróquera y Playita, en el municipio Bojayá; situación que en la actualidad se ha extendido a las

comunidades de: Nuevo Olivo, Unión Cuití, Punto Alegre, Hojas Blancas, Túgena, Salinas y Lana. Y sobre las comunidades afro descendientes de: Pogue, Piedra Candela, La Loma de Bojayá y Cuía. Así mismo en Vigía del Fuerte, ejercen control sobre el río Arquía donde de manera consecutiva están afectando a las comunidades afrodescendientes de Isleta, Vegáez, Punta de Ocaidó, Boca de Luisa, Vidrí, Puerto Palacios y Puerto Medellín.

El propósito de las FARC estaría centrado en la apropiación del territorio que comprende la parte media del río Atrato, incluyendo las cuencas de los ríos ubicados a esa altura: Murri, Arquía, Bojayá, Napipí y Opogadó; con intereses particulares en la explotación y comercialización de recursos maderables, siembra intensiva y extensiva de hoja de coca, en toda la zona; y cultivos de Palma africana en el río Opogadó.

Para estos fines, las FARC han emprendido acciones vulneratorias de los derechos fundamentales de la población y que infringen en Derecho Internacional Humanitario, de las comunidades afrodescendientes e indígenas nativas de manera consecutiva y reiterada. En la nota de seguimiento N° 001-07, de enero 19 de 2007, se relacionaron los hechos de violencia ocurridos en estas comunidades, los cuales tienen que ver con desplazamientos forzados, asesinato de un civil, restricciones a la movilización particularmente en el río Arquía, amenazas a las comunidades indígenas, apropiación y uso ilegal de sus territorios.

En la actualidad, las acciones de violencia se han extendido hacia otras comunidades indígenas registrándose los siguientes hechos de violencia contra la población civil:

El día 29 de marzo de 2007, las FARC, frente 34, retuvieron a dos personas, en el corregimiento San Antonio de Padua, jurisdicción del Municipio Vigía del Fuerte-Antioquia.

Durante el mes de mayo de 2007 tanto las comunidades afro descendientes, Pogue, Loma de Bojayá y Piedra Candela, como las Indígenas: Tugena, Punta Alegre, Hojas Blancas, Lana, Nuevo Olivo, Salinas; manifestaron su constante temor por las incursiones que hicieran a sus territorios de personal armado perteneciente a los frentes 34 y 57 de las FARC. La misma situación manifestaron los habitantes afro descendientes de Buchadó, Veracruz y San Miguel, correspondientes a Vigía del Fuerte, dado que las FARC utilizan sus territorios de manera transitoria, para comunicarse entre los ríos Arquía y Bojayá.

El 8 de julio, se conoció sobre la retención ilegal que hicieran las FARC, al señor HERMENEGILDO VIERA CHAVERRA, candidato a la Alcaldía de Vigía del Fuerte. El hecho se presentó en el río Arquía, en inmediaciones de la comunidad Puerto Medellín. Se cree que se trata de un secuestro extorsivo.

Durante el mes de julio, las FARC afianzaron su presencia en los ríos Napipí y Bojayá, particularmente en las comunidades de Unión Cuití y Punta Alegre, respectivamente. Se conoció que la agrupación guerrillera, permanece al interior de las mismas; de manera impositiva ocupan sus viviendas y saquean sus cultivos y parcelas, para su sustento.

Adicionalmente, las FARC están implantando cultivos lícitos e ilícitos en sus territorios y vienen explotando y comercializando recursos maderables. Adicionalmente, los indígenas son obligados a realizar labores y castigados por no cumplir a cabalidad con sus tareas; ya se han presentado desabastecimientos, confinamientos; y altos niveles de miedo y zozobra con especial particularidad en las mujeres. También en ese mes, 19 personas salieron de la región, a través de la zona montañosa hacia territorio correspondiente al municipio Juradó.

Las comunidades en general han manifestado a los miembros de una misión de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas, que visitó las comunidades, intenciones de desplazamiento masivo, si la situación de amenaza persiste.

En desarrollo de los controles a la navegabilidad que incluyen saqueos, asesinatos selectivos, secuestros y retenciones, el día viernes tres de agosto del presente año, fue interceptada por la guerrilla de las FARC-EP, a la altura del corregimiento Buchado, municipio Vigía del Fuerte, una lancha de transporte publico que cubría la ruta Turbo – Quibdó, a través del río Atrato; dos personas resultaron heridas de gravedad, como consecuencia de los disparos que realizaron los miembros de la agrupación armada a la embarcación.

En la actualidad la Armada Nacional realiza operativos hacia la parte baja del río Cuia (afluente del Bojayá) mientras que las FARC permanecen en las comunidades, constituyéndose en una amenaza para la población civil ante un eventual enfrentamiento armado.

El panorama actual de riesgo hace prever la probable violación de Derechos fundamentales de la Población e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, particularmente en contra de los pueblos indígenas, de los ríos Cuia, Chicue y Napipí en el municipio Bojayá; de las comunidades afro descendientes de Bojayá (Pogue, Loma de Bojayá, Piedra Candela y Cuia); y de San Jose de Padua, Veracruz y San Miguel en jurisdicción de Vigía del Fuerte; las cuales estarían representadas en enfrentamientos armados con interposición de población civil, sembrado de minas antipersonales, ejecución de trabajos forzosos y obligatorios a hombres y mujeres, amenazas, ejercicio sexual y de violencia en contra de las mujeres, homicidios selectivos y de configuración múltiple, masacres, reclutamientos, desplazamiento forzado y apropiación ilegal del territorio.

RECOMENDACIONES

Previo estudio de la presente Nota de Seguimiento, se solicita al CIAT mantener la Alerta correspondiente y orientar a la adopción de medidas que lleven a conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo, con el fin de proteger la población civil y brindar atención humanitaria de emergencia si así fuere el caso. En especial consideramos necesario recomendar:

1. A las autoridades civiles (Ministerio de Defensa, Vicepresidencia de la República, Gobernaciones del Chocó y Antioquia, Alcaldías de Bojayá y Vigía del Fuerte), y militares (Brigada XV: Fuerza de Tarea del Atrato, Comando de Infantería de Marina del Pacifico y Batallón Alfonso Manosalva Florez;

y Comandantes de Policía de Bojayá y Vigía del Fuerte) coordinen las medidas necesarias para reforzar los dispositivos de seguridad y protección de la población Afrocolombiana e indígena de las zonas rurales de los municipios Bojayá y Vigía del Fuerte, a través de la concertación con las autoridades tradicionales y organizaciones étnicas.

2. A las autoridades civiles y de Fuerza Pública del orden departamental y local adopten medidas que garanticen la libre movilización de la población civil, de sus alimentos y demás bienes indispensables para la supervivencia, permitan y ofrezcan garantías para que permanezcan y puedan desarrollar sus actividades cotidianas al interior de sus territorios. Así mismo, que el desarrollo de sus operativos militares los realicen en el marco de lo contemplado en el Derecho Internacional Humanitario.

3. A la Agencia Presidencial para la Acción Social, coordinar las acciones pertinentes para prevenir futuros desplazamientos a través de la ejecución de programas tales como Red de Seguridad Alimentaria y Cadenas Productivas y Sociales, entre otros. Igualmente, la adopción y/o refuerzo de las medidas que faciliten la inscripción y registro de las personas y comunidades étnicas afectadas, como desplazadas en el SIPOD, de tal forma que se les brinde inmediatamente atención humanitaria de emergencia y se les vincule a procesos de restablecimiento en condiciones de integralidad, en su calidad de sujetos colectivos de derecho (perspectiva étnico – territorial).

5. A la Agencia Presidencial para la Acción Social y a las Alcaldías Municipales, mantener activo el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada y actualizar el Plan de Atención para los desplazamientos masivos, garantizando la participación de los integrantes de la Junta de los Consejos Comunitarios (Mayor y menores) y Cabildos Indígenas, como autoridades étnicas en sus territorios.

6. A las autoridades civiles, a la Dirección de Etnias, Acción Social, INCODER, y demás entidades con competencia en la protección territorial, cumplir con las ordenes consignadas en el decreto 250 de 2005, en cuanto a la operación de los mecanismos comunitarios, jurídicos e institucionales para la protección de los territorios étnicos. Para ello, es imprescindible verificar y apoyar la situación legal, de seguridad jurídica y de ordenamiento y manejo del territorio colectivo y los resguardos, con la finalidad de que se operen las medidas para la mitigación del riesgo y la vulnerabilidad territorial.

7. A las Gobernaciones del Chocó y Antioquia, como a las Alcaldías Municipales de Bojayá y Vigía del Fuerte, se les recomienda de manera especial adelantar las gestiones necesarias ante el *INCODER* para que se realice el respectivo diagnóstico sobre el estado actual de las tierras en lo que tiene que ver con la titulación colectiva, y a partir de este, solicitar apoyo ante el Ministerio del Interior, para desarrollar Programas en asocio con los Consejos Comunitarios locales y Cabildos Indígenas, a fin de acelerar estos procesos, en aquellas comunidades donde aún no se halla adelantado.

8. A las Organizaciones Étnico –Territoriales de la región que han liderado los procesos de Titulación Colectiva y divulgación de los Derechos Étnicos contemplados en la Ley 70, para que elaboren, actualicen, y/o apliquen los reglamentos internos de las comunidades como estrategia de control frente al uso del territorio.

9. Al ICBF para que apoyados por la oficina de etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, adopten todas las medidas preventivas y punitivas contra la violencia, malos tratos, ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer. Así mismo, proporcionar servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas.

10. La Defensoría del Pueblo ha advertido que en los territorios de disputa, entre los grupos armados ilegales, no copados permanentemente por la autoridad y ante eventuales retiradas de uno u otro actor, se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la población civil.

JORGE ENRIQUE CALERO CHACON

Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la
Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado